

FUNDACIÓN GREGORIO ORDOÑEZ.

MESA REDONDA.

SAN SEBASTIÁN 2 DE NOVIEMBRE DE 2011.

Intervención de D. Rogelio Alonso

(Profesor titular de Ciencia Política, Universidad Rey Juan Carlos)

“Empresarios vascos agradecen a Rubalcaba el fin de ETA”. Así titulaba El País en su primera página del 2 de septiembre una fotonoticia de un sonriente candidato socialista. El diario instrumentalizaba el terrorismo para atribuir a Rubalcaba una positiva noticia bastante tiempo antes de que ETA anunciara, como hizo el 20 de octubre, el “cese definitivo de su actividad armada”. El medio sacrificaba el rigor periodístico generando un clima favorable en torno a uno de los pocos temas que podía reportarle al candidato socialista alguna rentabilidad electoral. Así ocurría porque ni siquiera el “cese definitivo” de la “actividad armada” de ETA anunciado posteriormente equivalía al “fin de ETA” anticipado bastantes semanas antes. Ciertamente la última declaración de ETA produce un alivio que no debe ser subestimado. Sin duda, mucho más positivo es semejante comunicado que otros como los que ETA realizó en el pasado anunciando la ruptura de sus distintas treguas. No obstante, ETA no ha anunciado su desaparición, obviedad que obliga a matizar la euforia de quienes atribuyen al comunicado un alcance e irreversibilidad que sólo el tiempo demostrará.

Las exultantes interpretaciones del comunicado por parte de muchos políticos deben contraponerse con sus declaraciones previas cuando repetían que “el único comunicado de ETA que será bienvenido es el de su disolución”, o que “la mera existencia de ETA representa una amenaza inaceptable”. Asimismo, las expectativas frustradas en el pasado aconsejan prudencia al interpretar las promesas etarras. ETA continúa existiendo y, por tanto, sigue sin renunciar a ejercer la coacción que supone su presencia en el escenario político tras décadas de terrorismo que, lógicamente, condicionan las actitudes de los ciudadanos. Debe tenerse en cuenta esta constatación al analizar el lugar del terrorismo en campaña y en la siguiente legislatura. Como ha declarado el presidente del PNV: “¿Para qué puede querer las armas una organización que ha renunciado a la violencia?”

Como también se repitió en el pasado, aunque algunas optimistas valoraciones del comunicado parecen ignorarlo, lo que importa de ETA no es lo que dice en público, sino lo que hace. Documentación interna de la banda, informes de inteligencia y la reciente memoria de la Fiscalía General reflejan una preocupante contradicción entre lo que ETA hace y lo que se le atribuye que va a hacer al interpretarse favorablemente promesas como las que ahora formula y que ya incumplió en el pasado. “El grado de amenaza que representa la pervivencia de su estructura operativa no deja de ser elevado”, concluía la Fiscalía relacionando el parón de atentados con el periodo electoral. Recordaba asimismo el interés de ETA en actuar como “garante” de “un proceso de negociación” y añadía: “continuará realizando aquellas actuaciones que, sin demasiada trascendencia para la opinión pública, le permitan tener perfectamente engrasada su maquinaria terrorista para poder afrontar en el futuro la reanudación de su actividad terrorista”, pues “sigue disponiendo de comandos en Francia y España que pueden actuar en cualquier momento en función de que su estrategia no surta los efectos deseados”.

ETA interrumpe sus atentados mientras su brazo político se fortalece, como evidencia su crecimiento electoral y la reproducción por parte de actores democráticos de una narrativa favorable a los intereses del movimiento terrorista. Este relato legitimador de la trayectoria terrorista se sustenta en la legalización de una formación que la policía y el Tribunal Supremo han confirmado es parte de ETA. El gobierno fue incapaz de evitar la entrada de ETA en las instituciones, inutilizando una de las más eficaces medidas contra ella, a pesar de que, como reconocía el Ministro del Interior –en clara admisión de su fracaso-, “Bildu no ha traducido en hechos el discurso que permitió su legalización”. La internacionalización del relato etarra mediante la conferencia de San Sebastián constituye otro triunfo en la justificación del proyecto terrorista. Lo complementa la legitimación que gobierno central y vasco le han brindado al entorno terrorista ensalzando sus tácticas propagandísticas –por ejemplo la Declaración de Guernica y otros comunicados- como pasos hacia la paz cuando solo enmascaraban una simulada pero inexistente ruptura con ETA.

Partidos y electores deberían considerar que el reciente comunicado etarra puede contribuir a reforzar un mecanismo de presión sobre gobierno y sociedad como el que ya ha aplicado el movimiento terrorista integrado por ETA y sus representantes políticos: la promesa de una completa desaparición de la banda –que aún no se ha producido-, y la consiguiente amenaza latente de violencia mientras ETA no desaparezca permiten la perpetuación de la organización terrorista, cuya disolución queda condicionada al fortalecimiento de su frente político. Los precedentes demuestran que el brazo político de ETA desea rentabilizar la decadencia de la banda, pero sin renunciar a ella y, por tanto, eludiendo exigir la desaparición de una intimidación latente que le beneficia. Amañur, como Bildu, será premiada por un fin de ETA que no ha llegado. Además, a pesar de la negativa de gobierno y oposición a reconocer precio político alguno a cambio del comunicado etarra, es evidente que éste se ha producido tras la legalización de Bildu –que tal y como constataron la policía y el Tribunal Supremo es parte de ETA-, tras el inmerecido lavado de imagen de Batasuna mediante el discurso de algunos dirigentes políticos que han asumido una ruptura con ETA que no se ha evidenciado, y después de la legitimación e internacionalización del relato terrorista que la conferencia de San Sebastián supuso.

En consecuencia, el próximo gobierno deberá enfrentarse a un fenómeno terrorista que ha evolucionado y que se ha adaptado a una coyuntura poco favorable para la continuidad de una campaña de atentados sistemáticos, pero sin que ETA haya renunciado a ella si lograra superar su profunda debilidad operativa. El gobierno entrante se encontrará con una ETA debilitada operativamente, pero fortalecida políticamente y que probablemente exigirá la negociación a la que no dice haber renunciado. El fortalecimiento que para el movimiento terrorista integrado por ETA y sus representantes ha supuesto su vuelta a las instituciones y la recomposición del nacionalismo radical ha llevado a la banda a ceder a su brazo político la gestión de un proyecto que sigue planteando un peligroso desafío para la sociedad. El periodista Florencio Domínguez, posiblemente la voz más autorizada sobre el funcionamiento de ETA, subrayaba en un reciente artículo que “Batasuna y Bildu no interpretan lo ocurrido [la legalización] como el resultado de una renuncia a su estrategia político-militar, sino como el fruto de una acumulación de fuerzas con la que ha vencido al Estado, para el que resultaba insostenible la ilegalización. Esa es la clave que hay que tener en cuenta”.

Los representantes del nacionalismo radical y violento desean actuar en política con la injusta presencia de una organización terrorista en la sombra. Además pretenden hacerlo sin la imprescindible deslegitimación de esa brutal violación de los más básicos derechos humanos perpetrada por ETA con la connivencia de un entorno político que hoy ejerce el poder en Guipúzcoa y que probablemente contará con una significativa representación en las Cortes. El

hecho de que se haya admitido su participación en democracia sin la exigencia de la necesaria condena de ETA y sin evidencia de su ruptura con la banda, constituye un precio político que el próximo gobierno no debería ignorar. Lo sugería en un reciente artículo el director del Euskobarómetro Francisco Llera al señalar que “Lo que ya tiene garantizado [ETA] es la impunidad y el olvido de su pasado de sangre y terror, porque no parece que nadie vaya a exigirle rendir cuentas del mismo”.

Debe recordarse además que fuentes tan relevantes como las citadas en líneas precedentes confirman que hasta la fecha ETA mantenía su amenaza latente y sus objetivos tradicionales – autodeterminación y territorialidad-, persistiendo en sus intentos de reorganización para reactivar el terrorismo si superara su debilidad operativa. Conviene indicar que ETA opta por modulaciones tácticas en función de sus intereses, pero no suele recurrir a drásticos y súbitos cambios de estrategia como el que supondría aquel que todavía debe ser el objetivo de la política antiterrorista: la disolución.

El fortalecimiento que para el movimiento terrorista integrado por ETA y sus representantes ha supuesto su vuelta a las instituciones y la recomposición del nacionalismo radical ha llevado a la banda a ceder a su brazo político la gestión de un proyecto que sigue planteando un peligroso desafío para la sociedad. Precisamente esas favorables circunstancias, si lograra sortear su extenuación operativa, pueden disuadir a ETA de descartar un futuro regreso a la violencia por el temor al coste que le acarrearía a su frente político. Si ETA amenazara con atentar, sus representantes políticos podrían exigir más concesiones apoyándose en el discurso, alimentado por el Gobierno, que diferencia a los “políticos” de los “militares” pese a la coordinación entre ellos: su chantaje se sintetizaría en la exigencia de reforzar a los “políticos” para acallar a los “militares”. ¿Cómo reclamarles entonces responsabilidades cuando se les ha eximido de ellas favoreciendo su inmerecida rehabilitación? A la coacción de ETA sobre el gobierno entrante se sumaría la presión de quienes podrían reclamar al ejecutivo iniciativas para evitar asesinatos y no echar a perder un horizonte de “paz” que tanta esperanza vuelve a suscitar. No es baladí que el lehendakari propusiera un acercamiento de presos sin condicionarlo a la disolución de ETA y que otros actores planteen ya demandas políticas favorables al nacionalismo radical. Las injustas declaraciones de Felipe González propugnando incumplir la legalidad que debe exigírsele a ETA, acusando al PP de intentar humillar a la banda y de bloquear su final, demuestran la falta de escrúpulos en esta cuestión.

Esta misma instrumentalización del terrorismo se aprecia en las declaraciones de responsables políticos que alardean de un final de ETA que aún no se ha materializado. Esta actitud encubre los fracasos de los decisores políticos y el hecho de que los éxitos antiterroristas son atribuibles en su gran mayoría a las fuerzas y cuerpos de seguridad. En realidad el principal acierto del Gobierno ha sido la recuperación de la presión policial y judicial sobre ETA atenuada durante la contraproducente negociación de la primera legislatura. Dicha reactivación ha logrado debilitar operativamente a ETA mientras ésta se ha fortalecido en el ámbito político y social, dimensiones en las que las autoridades que tanto explotan los éxitos policiales han fracasado rotundamente.

Ese es el legado para el nuevo gobierno: una ETA debilitada operativamente, pero fortalecida políticamente y que probablemente exigirá la negociación política a la que no dice haber renunciado. Es por ello incongruente atribuir a este gobierno un final de ETA que, desgraciadamente, todavía no se ha producido. Además ha ignorado que el terrorismo utiliza un medio –la violencia- en la persecución de un fin –la obtención de poder para imponer sus objetivos nacionalistas-, y que renuncia temporalmente a ciertas manifestaciones terroristas – aunque no a su amenaza latente- si logra sus aspiraciones mediante métodos complementarios. Se ha subestimado que los terroristas persiguen el poder y que tras

obtenerlo, no renuncian a él, sino que lo administran como lo han logrado, o sea, coaccionando y legitimando el terrorismo, como lo están mostrando ya desde las instituciones. Las amenazas y riesgos para la política antiterrorista del nuevo gobierno no serán solo aquellos en los que las fuerzas de seguridad han demostrado tanta eficacia, forzando a ETA a un cese de su actividad armada, sino que vendrán definidos por las diversas expresiones del desafío planteado por un movimiento terrorista que se adapta a las circunstancias. Deberán ser los decisores políticos los que diseñen una estrategia política que no vuelva a entorpecer el trabajo que con tanta profesionalidad desempeñan las fuerzas de seguridad para que, por fin, se logre la completa desaparición del terrorismo en cualquiera de sus formas.

En una campaña dominada por la economía, quizás estas cuestiones reciban escasa atención. Sin embargo, no puede ser un tema que el nuevo gobierno ignore. Si lo hiciera, el fracaso que para ETA ha supuesto su enorme debilitamiento operativo podría llegar a convertirse en un éxito estratégico que le permitiría escapar de la derrota que el terrorismo merece y que las víctimas necesitan. Sin duda alguna, ETA y su entorno político van a recurrir a tácticas con las que intentar eludir esa derrota, siendo la internacionalización una de las armas que a buen seguro utilizarán. El referente norirlandés será una vez más instrumentalizado por actores que persiguen favorecer la agenda de la organización terrorista y de su entorno político, cuestión por la que parecen apropiadas algunas aclaraciones sobre cómo el IRA perpetuó su existencia en Irlanda del Norte mientras su brazo político extraía importantes concesiones.

En julio de 2005 el IRA ordenó “formalmente la finalización de su campaña armada”. Más de una década separaba esta declaración y la de 1994 en la que el IRA anunció el “cese completo de operaciones militares” y que, al igual que el último comunicado de ETA, fue presentado entonces como el final de su campaña terrorista. Sin embargo, las esperanzas se frustraron en febrero de 1996, al romper el IRA una tregua que reinstauró en 1997. Desde entonces hasta la declaración de 2005 el IRA permaneció activo, realizando actividades terroristas e incumpliendo las promesas recogidas en sucesivos comunicados. Sirvan de ejemplo los cuatro asesinatos cometidos por el IRA en 1999 y los tres perpetrados en 2000, además del robo en 2004 de una sucursal bancaria en Belfast, uno de los más cuantiosos en la historia del Reino Unido.

Durante ese periodo las expectativas que en la sociedad generó la posibilidad de un definitivo final del terrorismo fueron manipuladas y explotadas por los representantes políticos del IRA. Contaron asimismo con la aquiescencia de gobiernos democráticos como el británico y el irlandés, lo que permitió un peligroso fortalecimiento político y la legitimación de los responsables de una brutal campaña de violencia, retrasando además la desaparición del IRA. Las personas que toleraron tan flagrante violación de esos compromisos públicos del IRA fueron las mismas que ahora se presentan pomposamente como “facilitadores” del “proceso de resolución del conflicto” en el País Vasco: los primeros ministros británico e irlandés, Tony Blair y Bertie Ahern, el jefe de gabinete del primero de ellos –Jonathan Powell-, y Gerry Adams.

Los precedentes referidos y los esfuerzos de Lokarri y el entorno terrorista por facilitar la injerencia de semejantes personajes revelan su intención de facilitar un escenario en el que la apariencia de final de la violencia sustituya a la auténtica erradicación de toda coacción terrorista y a la disolución de ETA. En ese contexto, el reciente comunicado etarra puede contribuir a reforzar un mecanismo de presión sobre gobierno y sociedad como el que ya ha aplicado el movimiento terrorista integrado por ETA y sus representantes políticos: estos prometen la desaparición de la banda –que aún no se ha producido-, condicionándola al fortalecimiento de los “políticos”, garantizándose así la perpetuación de ETA al reportarles beneficios mientras, supuestamente, trabajan por su final. Pese a la negativa de gobierno y oposición a reconocer precio político alguno a cambio del comunicado etarra, es evidente que

éste ha ido precedido de la legalización de Bildu –que tal y como han constatado la policía y el Tribunal Supremo es parte de ETA-, el lavado de imagen de Batasuna a través del discurso de no pocos dirigentes políticos, y la legitimación e internacionalización del relato terrorista que la conferencia de San Sebastián han supuesto.

La indulgencia con la que los primeros ministros de Gran Bretaña e Irlanda actuaron contra el IRA en esa etapa fue duramente criticada por la diplomacia estadounidense. Reveladoras fueron las críticas a la actitud de los británicos al asumir las exigencias de Adams cuando éste planteó que no se le debía imponer la desaparición del IRA. Powell defendió constantemente a Adams cuando éste aducía dificultades para cumplir con la legalidad, si bien los servicios de inteligencia y diversos diplomáticos sostuvieron que ésta era una de las argucias del dirigente terrorista para chantajear a británicos e irlandeses. La ingenuidad de Blair y su pusilánime actitud hacia Adams fue censurada por los participantes en el proceso, que llegaron a calificarla de “auténtica locura”, pues el IRA y el Sinn Fein solo se movían cuando se les “estrangulaba”.

En su afán por no dañar la exitosa imagen pública del proceso, se aceptaron graves concesiones frente al terrorismo. De ese modo se perpetuó al IRA incentivándose además la utilización de la violencia por parte de grupos escindidos que hoy aún se mantienen activos, realidad que pone en tela de juicio el papel de Blair, Ahern y Adams en Irlanda y el País Vasco. A pesar de la aparente firmeza del gobierno británico, el IRA obtuvo la excarcelación de todos sus presos en 2000 sin que la banda hubiese ni siquiera iniciado un desarme que se le venía reclamando desde años atrás. Obtuvo semejante concesión incumpliendo una de las fundamentales “salvaguardas” introducidas por la legislación británica para articular el programa de excarcelación que contemplaba que no podrían acogerse al mismo “aquellos internos que pertenezcan a organizaciones que no han declarado o que no están manteniendo un alto el fuego completo e inequívoco”. Tampoco se respetó la exigencia que condicionaba la excarcelación a la “completa cooperación” de la organización terrorista con la comisión que debía hacer posible el desarme de los grupos terroristas y que se inició en 2001.

La continuidad de las actividades terroristas fue reconocida por el propio Ahern, que en enero de 2005, ante el parlamento irlandés, admitió que había ignorado las actividades delictivas en las que el IRA seguía involucrándose. Un año antes su homólogo británico había afirmado que no debía tolerarse una situación en la que representantes de la voluntad popular se vieran obligados a compartir el gobierno de Irlanda del Norte con un partido como el Sinn Fein asociado a un grupo terrorista como el IRA todavía activo. Sin embargo, él lo aceptó.

Como el referente del IRA confirma, su supervivencia facilitó una intolerable intimidación que algunos desean trasladar al País Vasco. A pesar de que el Lehendakari ha repetido en el pasado que la mera presencia de ETA constituye una amenaza inaceptable, su exultante valoración del último comunicado sugiere que está subestimando sus anteriores palabras. Si así ocurriera, se corre el riesgo de cerrar en falso ese final de ETA que ahora se anuncia sin la disolución de una banda que todavía no ha renunciado a sus objetivos.